

¿América Latina en la encrucijada?

Factores de riesgo e inseguridad

América Latina atraviesa una difícil situación. La estabilidad de las instituciones, la permanencia de los presidentes en el Gobierno y la tranquilidad social están lejos de ser objetivos alcanzados. En el siguiente artículo se describe el escenario que enfrenta América Latina y se señalan cuatro fuentes principales de crisis e inseguridad: vulnerabilidades político-institucionales, socioeconómicas relacionadas con la integración, de seguridad interna y de seguridad externa. Además se discuten los desafíos de la arquitectura regional y el papel que debe jugar la OEA en el contexto actual.

**Claudio Fuentes /
David Álvarez**

Si consideramos que, desde hace años, América Latina presenta en casi la totalidad de su territorio una adscripción mayoritaria a los regímenes democráticos, quizás resulte contraproducente hablar de que la región se encuentra hoy atravesando una encrucijada. Sin embargo, la evidencia en varios países

Claudio Fuentes: doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill; y director de Flacso-Chile. Entre sus últimas publicaciones destacan *Bajo la mirada del halcón* y *Promesas de cambio. Izquierda y derecha en el Chile contemporáneo*. Actualmente preside la Asociación Chilena de Ciencia Política.

David Álvarez: especialista en Ciencias Políticas y Magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, con mención en Estudios de Defensa. Actualmente es investigador de Flacso-Chile, profesor de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales y editor de la revista *Fuerzas Armadas y Sociedad*; @: <dalvarez@flacso.cl>.

Palabras clave: seguridad regional, democracia, gobernabilidad, América Latina.

del hemisferio demuestra claramente que la concurrencia periódica a elecciones no es condición suficiente para asegurar la estabilidad constitucional ni evitar la caída de regímenes democráticos. En efecto, durante las semanas previas a la publicación de este artículo dos países de la región enfrentaban nuevamente el fantasma de la inestabilidad y la crisis institucional. Mientras el 10 de junio de 2005 Bolivia observaba cómo su presidente caía por quinta vez en menos de un lustro, en Nicaragua las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo amenazaban nuevamente con romper el equilibrio de poderes en el país.

Ciertamente, los problemas de gobernabilidad que enfrenta la región han estado presentes desde hace ya varias décadas y se han transformado en un tema central de la agenda multilateral. Pero, ¿cuál es el diagnóstico de las vulnerabilidades regionales? ¿Qué factores de riesgo constituyen los principales desafíos de la región? ¿Son nuestras democracias tan frágiles como para sucumbir ante cualquier brío de inestabilidad? En el siguiente trabajo abordaremos las preguntas sobre el escenario que enfrenta hoy América Latina en términos de crisis e inseguridad. Abordaremos los principales factores de riesgo y adelantaremos algunas tendencias sobre el futuro de la región ante la presente encrucijada.

Un diagnóstico de la realidad regional

Cuando, a principios de la década de los 90, Chile volvía a recuperar su democracia, parecía que América Latina cerraba definitivamente el capítulo de las dictaduras militares que durante años se instalaron en la región. Del autoritarismo como principal foco de preocupación se pasó al estudio de las transiciones y consolidación de las democracias con una visión más bien optimista acerca del futuro económico y social de nuestros países.

No obstante, transcurrida más de una década, el promisorio escenario que perfilaba gran parte de los investigadores interesados en América Latina –que involucraba la consolidación de la democracia y el ansiado incremento del bienestar económico– está lejos de ser una realidad. Por el contrario, crecientes protestas sociales reflejan cada vez con mayor fuerza que la población no está dispuesta a tolerar la pasividad gubernamental ante problemas tan graves como la corrupción o el clientelismo político, llegando incluso a provocar la destitución presidencial.

Si bien los Estados en los que se realizan elecciones son una realidad en casi todo el hemisferio –lo que se denomina «democracias formales»–, en muchos casos persisten aún serias deficiencias relacionadas principalmente con el res-

peto a los derechos humanos, la existencia de profundas desigualdades sociales, debilidades institucionales, entre otras. ¿Cuáles son entonces aquellos aspectos que traspasan las barreras nacionales y constituyen una preocupación para toda la realidad hemisférica?

La inestabilidad se ha transformado en una de las características más persistentes de la región y es el reflejo de una serie de crisis políticas y sociales que han producido la caída de varios presidentes y provocado su reemplazo anticipado ya sea por la vía de elecciones o por la vía de la designación de mandatarios por parte de los congresos. Solo durante los últimos 15 años se han producido más de 20 crisis institucionales, siendo las más recientes las caídas de los presidentes de Ecuador y de Bolivia durante el primer semestre de 2005.

Cuadro 1

América Latina. Crisis político-institucionales (1990-2005)

	Golpes de Estado	Levantamiento o tensión militar	Destitución/Renuncia del presidente
1990-1995	Surinam (1990), Haití (1991), Venezuela (1992), Perú (1992), Guatemala (1994)	Argentina (1990), Chile (1990 y 1993), Honduras (1991), Venezuela (1992), Colombia, (1995), Haití (1995), Paraguay (1994 y 1995), Panamá (1995)	Brasil (1992), Venezuela (1993)
1996-2000		Paraguay (1996), Guatemala (1997), Honduras (1997), Paraguay (2000), Perú (2000)	Ecuador (1997 y 2000) Paraguay (1999), Perú (2000)
2001-2005	Venezuela (2002)	Venezuela (2002)	Argentina (2001), Haití (2004), Ecuador (2005), Bolivia (2002, 2003, 2004, 2005)

Fuente: Flasco-Chile.

América Latina es una región vulnerable y, a pesar de los muchos esfuerzos que se han desarrollado para superar las causas de la fragilidad, aún queda un largo camino por recorrer. Si sintetizamos las principales fuentes de esta vulne-

rabilidad se pueden clasificar en cuatro fuentes básicas: 1) político-institucionales, 2) económicas, 3) sociales, y 4) de seguridad.

Vulnerabilidades político-institucionales

De todas las fuentes de vulnerabilidades que enfrenta la región, la fragilidad de los sistemas democráticos para resolver y enfrentar las crisis institucionales se constituye en la principal fuente de inestabilidad. En general, en América Latina las democracias suelen ser débiles y tal como lo demuestra el cuadro 1 la mayor evidencia de esta fragilidad es la alta recurrencia de crisis con participación de las Fuerzas Armadas, o cuyo desenlace final es la renuncia o destitución de los presidentes. En el transcurso de estas crisis institucionales, a menudo se han producido violaciones sistemáticas a los derechos civiles, situaciones con altos grados de violencia institucionalizada o elevados niveles de corrupción que, sumadas, han dado como resultado una creciente desafección hacia los partidos políticos por parte de la ciudadanía y una seria crisis de representatividad.

Desde el punto de vista analítico, las razones para la repetición de las crisis pueden encontrarse tanto en la debilidad de la institucionalidad como en la baja tradición democrática existente. Haití, Ecuador y Bolivia se han convertido en casos emblemáticos de esta situación, y aunque en estos últimos dos países la concurrencia de las FFAA no ha sido el factor desestabilizador de la democracia, se observan fuertes debilidades que impiden que situaciones de conflicto se resuelvan dentro del cauce de la normalidad.

Si bien la existencia de instrumentos como la Carta Democrática Interamericana y la conformación de una comunidad de países democráticos en el hemisferio han sido clave para evitar que sean nuevamente regímenes autoritarios los que se instalen en nombre de la defensa institucional, la deslegitimación de los procesos democráticos como forma de resolución de conflictos ha provocado un aumento considerable de renuncias presidenciales y de abolición de las constituciones con la consiguiente introducción de incertidumbre y de nuevas reglas del juego. Como parte de este proceso de consolidación democrática, un número importante de países no pasa el examen de respeto a los derechos civiles y en algunos se violan sistemáticamente los derechos humanos. Mientras en casi todos los países se reconocen los derechos políticos de sus ciudadanos, solo en una pequeña porción existe pleno respeto a las libertades individuales y se

Las razones para la repetición de las crisis pueden encontrarse tanto en la debilidad de la institucionalidad como en la baja tradición democrática existente

garantizan derechos como el de asociación o expresión, entre otros (v. <www.freedomhouse.org>, 2002).

La corrupción es a su vez uno de los factores que más inciden en la persistencia de crisis institucionales en la región. Desde un punto de vista económico, la corrupción genera altos costos en el sistema, tanto por las asimetrías de información que produce como por el desvío de caudales públicos para fines privados. El resultado: beneficio personal para ciertos agentes con el consiguiente perjuicio para toda la sociedad. Si se examinan algunos indicadores internacionales relativos a la corrupción, la situación de América Latina es preocupante (Transparencia Internacional). En una escala de 1 a 10, ningún país de la región alcanza una nota que le permita entrar en el grupo de países con una baja percepción de la corrupción (notas 8 a 10). Solo Chile, Costa Rica y Uruguay se ubican en un lugar intermedio, mientras que el grueso de las naciones de América Latina se ubica dentro de las que tienen alta corrupción. Más allá de las cifras, el problema fundamental de la corrupción radica en que los países cuentan con débiles instituciones que permitan sancionar su incidencia. Si a esto le sumamos un contexto que otorga condiciones propicias para la existencia de casos de corrupción, en el que los mecanismos de control son frágiles (alta concentración de medios de comunicación, clientelismo político, entre otros) y las sociedades civiles son prácticamente inexistentes, en muchos casos el resultado es una profundización del problema.

Como suma de todo lo anterior, se observa cómo las poblaciones de los países de la región demuestran una desafección progresiva con respecto a la democracia y a las instituciones que la soportan. Mientras la Iglesia y la televisión son las instituciones que más confianza generan entre los ciudadanos latinoamericanos, el Congreso y los partidos políticos se ubican en las posiciones que menos apoyo reciben (Latinobarómetro, varios años).

Vulnerabilidades socioeconómicas

Una segunda fuente de inestabilidad reside en la alta vulnerabilidad que presentan nuestros países con respecto a los vaivenes macroeconómicos internacionales. Ciertamente, la mayor interdependencia ha permitido a los Estados del hemisferio contar con mercados mucho más amplios y generar dinámicas comerciales con países cuyas relaciones antes se limitaban prácticamente a la confrontación y a la competencia. Sin embargo, la mayor interrelación también ha generado mayor vulnerabilidad ante la existencia de crisis internacionales. Mientras durante la década de los 80 las vacilaciones económicas se circunscri-



bían a los países afectados y a unos pocos Estados adyacentes, el «efecto Tequila» y la crisis asiática repercutió casi sin excepción en todos nuestros países, y solo desde hace un par de años se observan signos de recuperación.

Cuadro 2

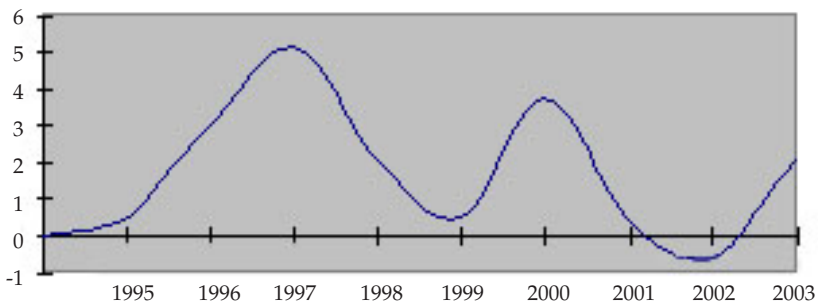
¿La democracia es preferible a cualquier forma de gobierno? (%)

	1996	1997	1998	2000	2001	2002	2003	2004	1996-2004
Nicaragua	59	68	72	64	43	63	51	39	-20
Paraguay	59	44	51	48	35	45	40	39	-20
Bolivia	64	65	55	62	54	56	50	46	-19
Perú	63	60	63	64	62	57	52	45	-18
Guatemala	51	48	54	45	33	45	33	35	-16
Colombia	60	69	55	50	36	39	46	46	-14
Costa Rica	80	83	69	83	71	77	77	67	-13
Panamá	75	71	71	62	34	55	51	64	-11
Brasil	50	50	48	39	30	37	35	41	-9
Argentina	71	75	73	71	58	65	68	64	-7
Ecuador	52	41	57	54	40	49	46	46	-6
El Salvador	56	55	79	63	25	40	45	50	-6
Uruguay	80	85	80	84	79	78	78	78	-2
México	53	52	51	45	46	63	53	53	0
Chile	54	61	53	57	45	50	51	57	3
Honduras	42	63	57	64	57	57	55	46	4
Venezuela	62	64	60	61	57	75	67	74	12
R. Dominicana						75		65	
América Latina	61	62	62	60	48	56	53	53	-8

Fuente: Latinobarómetro 2004.

Gráfico 1

América Latina: crecimiento del Producto Interno Bruto



Fuente: Cepal: Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2004.

En general, las escasas herramientas fiscales con las que cuentan los países de la región para enfrentar las crisis internacionales repercuten directamente en el crecimiento del PIB, así como en las poblaciones locales a través de un menor desembolso del gasto social.

Otra de las fuentes de vulnerabilidad en el ámbito económico tiene su origen en el aumento sostenido de la deuda externa. Hacia finales de los años 90, el nivel de endeudamiento externo, tanto público como privado, alcanzó cifras inéditas para la región, y el bajo nivel de confianza de los mercados internacionales ha repercutido en el encarecimiento de los préstamos disponibles para nuestros países. Si bien durante los últimos años el nivel de la deuda ha tendido a estancarse, entre 1993 y 2002 la región había incrementado su endeudamiento en un 37% (Cepal 2002). Como un reconocimiento de la importancia que tiene en el estancamiento de los países más pobres el pago de la deuda externa, hace pocas semanas el G-8 anunció la condonación total de los compromisos a los 18 países más pobres del mundo, incluidos Bolivia, Honduras y Nicaragua, cuestión que fue catalogada como un promisorio comienzo en el camino hacia la reducción de la enorme brecha entre los países más y menos industrializados.

En esta misma categoría, los altos niveles de desempleo han sido una constante de alto impacto en el empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de la región. Como una directa consecuencia de la inestabilidad económica, los índices de desempleo han aumentado de manera constante y se situaron, en 2002, apenas por debajo del 10%. Durante los últimos años, las poblaciones de Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay y Venezuela han experimentado fuertes alzas en las cifras de desempleo, derivadas de la baja en los niveles de producción e inversión interna. Entre 1980 y 2001, la población pobre de América Latina pasó de 40% a 43%. Mientras el 10% más rico de los hogares percibe 30% de los ingresos totales, el 40% más pobre se queda solo con un 10% de los ingresos (Cepal 2003). La población más rica recibe un sueldo 23 veces mayor que el quintil más pobre.

Las graves desigualdades que presenta la región han hecho de América Latina el continente menos equitativo del mundo. Entre los factores que contribuyen a perpetuar esta situación se encuentran la excesiva concentración del poder económico y la baja capacidad de los Estados para recolectar impuestos e impedir su evasión, lo que repercute directamente en las poblaciones más pobres de los

***Las graves
desigualdades
que presenta la región
han hecho de
América Latina
el continente menos
equitativo del mundo***

Es de esperarse que las poblaciones de nuestros países exijan a sus gobiernos más y mejor calidad en la entrega de servicios públicos como una manera de acortar las profundas desigualdades existentes entre la población

países, hechos que además tienden a perpetuarse en el largo plazo.

Aunque el gasto social ha aumentado constantemente durante el último decenio, aún son insuficientes los montos y la generación de programas de ayuda a los sectores más vulnerables. Es cierto que durante la década de los 90 el promedio regional del gasto social logró subir de 360 a 540 dólares per cápita. Sin embargo, comparadas en perspectiva, las cifras están lejos de equipararse con las de países cuyas poblaciones gozan de una mejor calidad de vida. Mientras Argentina destina 650 dólares per cápita al gasto en salud, Finlandia, que se ubica en la décima posición de los países con mayor desarrollo humano, destina 1.704 dólares para el mismo propósito (PNUD).

Una mirada a fondo a las últimas crisis en el Cono Sur demuestra cómo el gasto social influye fuertemente en la estabilidad política de los países. Mientras Argentina destina casi 1.000 dólares per cápita anual en ayuda social, comparativamente Perú y Bolivia entregan menor cantidad de recursos.

En el mediano y largo plazo es de esperarse que las poblaciones de nuestros países exijan a sus gobiernos más y mejor calidad en la entrega de servicios públicos como una manera de acortar las profundas desigualdades existentes entre la población. Asegurar un adecuado crecimiento y una redistribución de la riqueza hacia los sectores más vulnerables será de esta manera una prioridad para evitar conflictos sociales y crisis como las que la región se está acostumbrando a experimentar.

Integración social y vulnerabilidad

Como un corolario de la alta vulnerabilidad económica y la mala calidad de políticas destinadas a superar las diferencias sociales, en la mayoría de los países de América Latina los sectores tradicionalmente excluidos tienden a profundizar su situación de marginalidad y precariedad. Mujeres, jóvenes, grupos étnicos e inmigrantes constituyen el núcleo más duro de la discriminación y representan un tercer factor de vulnerabilidad que afecta directamente la estabilidad en los países de la región.

Los sectores juveniles, por ejemplo, presentan las tasas más altas de desempleo dentro del total de la población. Del mismo modo, aunque en los estratos profesionales las cifras tiendan a igualarse, las mujeres por lo general ganan un sueldo hasta 40% inferior al de los hombres en tareas de igual responsabilidad. En general, ante las situaciones de crisis e incertidumbre económica, estos dos sectores se convierten en los primeros en perder sus empleos y, una vez recuperada la estabilidad, son los últimos en volver a emplearse, generando un creciente descontento en importantes sectores de la población.

Más de 20 millones de personas viven fuera de sus países de origen y muchas de ellas sufren de discriminación social y cultural en los Estados huéspedes

Durante las últimas décadas, la emigración se ha convertido en un fenómeno de especial importancia para la región. Más de 20 millones de personas¹ viven fuera de sus países de origen, y muchas de ellas sufren de discriminación social y cultural en los Estados huéspedes, convirtiendo a la migración en un tema central para las políticas de gobierno a escala mundial. Aunque, ciertamente, los países con mayor nivel socioeconómico se vuelven un interesante polo de atracción para las poblaciones marginadas de los países más pobres, de manera creciente América Latina está experimentando importantes oleadas migratorias hacia países menos industrializados que ofrecen empleos de baja remuneración y precarias condiciones laborales, pero que, comparativamente, constituyen importantes oportunidades para ciertos sectores. La gran cantidad de bolivianos en Argentina, guatemaltecos en México y peruanos en Chile demuestra este punto.

Un 75% de los emigrantes de la región escoge como destino EEUU², y de ese porcentaje la mayor parte es de origen mexicano. Ciertamente son las malas condiciones sociales las que generan la necesidad de buscar nuevas oportunidades en otros países, que, de no mejorar, aumentarán las tensiones migratorias y generarán importantes problemas tanto en los países de origen como en los países huéspedes. Por otra parte, las migraciones se traducen en la región en un comercio ilegal que, según estimaciones, mueve entre 700.000 y 2 millones de personas cada año³. La prostitución infantil y adulta y la esclavitud se con-

1. Carolina Stefoni: «Seguridad humana y migraciones en América Latina» en <www.flasco.cl>, 2002.

2. V. <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barometro_economico/newsid_4067000/4067725.stm>.

3. V. <www.unfpa.org>.

***El tráfico de drogas,
el lavado de dinero,
el terrorismo
y el tráfico de armas
son amenazas emergentes
que obligan
a los gobiernos
a destinar crecientemente
importantes
sumas de dinero
solo para limitar
en parte la incidencia
de estas actividades
ilegales***

centran en las personas de menos recursos generando ganancias solamente superadas por el tráfico de armas y de drogas.

Los pueblos indígenas y las minorías étnicas también constituyen uno de los sectores tradicionalmente marginados por las políticas gubernamentales. Como consecuencia de esto, durante los últimos años se han constituido importantes movimientos de reivindicación social que incluso han costado el puesto a más de un mandatario.

Los movimientos de Chiapas en México e indigenistas en Ecuador y Bolivia constituyen solo algunos ejemplos del alto poder de movilización política que tales movimientos han adquirido. Aunque en América Latina no existe uniformidad en los conflictos entre el Estado y las comunidades originarias, diversos elementos se pueden identificar como comunes: demandas largamente postergadas, creciente presión por tierras y recursos naturales utilizados de manera ancestral por las poblaciones indígenas, incremento de las expectativas de participación en la vida política, entre otros.

Seguridad, nuevas amenazas y conflictos como fuente de vulnerabilidad

Aunque América Latina es considerada la región más pacífica del mundo, una serie de amenazas que afectan la seguridad constituyen otra importante fuente de vulnerabilidad para la supervivencia de sus Estados.

Desde el punto de vista tradicional, aunque la mayor parte de los conflictos interestatales ha sido superado por acuerdos bilaterales o exitosas negociaciones, la inestabilidad en la frontera entre Colombia y Venezuela aún constituye un foco de preocupación, principalmente por la existencia de la guerrilla y su posible expansión hacia áreas circundantes. A pesar de todo, este tipo de amenazas no se plantea como el gran desafío de la región en el ámbito de la seguridad durante los próximos años. El tráfico de drogas, el lavado de dinero, el terrorismo y el tráfico de armas son amenazas emergentes que obligan a los gobiernos a destinar cada vez mayores sumas de dinero solo para limitar en parte la incidencia de estas actividades ilegales.

El narcotráfico es un problema multilateral por tres razones fundamentales: en primer lugar, debido al importante flujo que se genera entre el área andina –principal región de producción– y EEUU y Europa, centros preferenciales de consumo de drogas; en segundo lugar, debido a que las políticas que se implementan en un país tienen efectos inmediatos en otro (según datos aportados por el Departamento de Estado de EEUU en 2002, las políticas para limitar las plantaciones en Bolivia y Perú entre 1990 y 1995 generaron un importante incremento de la producción en Colombia); y, por último, debido a que varios de los países de la región son utilizados como áreas de tránsito y distribución de la droga. El lavado de dinero tiene como corolario una actividad frecuente e intensiva. El tráfico de drogas, la corrupción, el terrorismo, entre otros ilícitos, utilizan preferentemente países con débil institucionalidad fiscalizadora para blanquear grandes sumas de dinero e incrementar la actividad ilegal. De acuerdo con indicadores internacionales, el lavado de dinero mueve recursos equivalentes al 3% del PIB mundial.

Con posterioridad a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, el terrorismo se transformó en una de las principales preocupaciones del gobierno norteamericano y, por extensión, en una fuente de vulnerabilidad para la región. Aunque América Latina, en comparación con otras regiones, presenta una baja incidencia de actividad terrorista, EEUU ha puesto especial énfasis en la prevención de este tipo de actividades a través de la ayuda militar⁴. Como reflejo de una preocupación de nuestros países por controlar las actividades terroristas, los Estados han suscrito una serie de medidas destinadas principalmente a fortalecer la cooperación y a evitar que la región se convierta en un refugio para la actividad subversiva.

El tráfico de armas es otro de los ilícitos que supera las barreras nacionales y se convierte en fuente de preocupación y vulnerabilidad para toda la región. El tráfico de armas pequeñas, que cada vez más presenta características de crimen organizado, es uno de los factores clave en el aumento de la violencia en muchos de nuestros países. En Centroamérica existe el mayor número de armas ligeras de América Latina, y constituye a la vez la zona del hemisferio con mayor índice de criminalidad⁵.

4. David Álvarez y Michelle Isenhouer: «Transferencia y ayuda norteamericana hacia América Latina: las prioridades que refleja el presupuesto» en *Observatorio* N° 2, Flacso-Chile, mayo de 2005.

5. V. Small Arms Survey: *The Impact of Small Arms Misuse in Central America*, Occasional paper, octubre de 2002.

En la mayoría de los países el aumento de la delincuencia y del crimen organizado mantiene a la población sumida en el temor, y constituye una de las principales vulnerabilidades de nuestros gobiernos. Según la Organización Mundial de la Salud, los mayores índices de criminalidad del mundo se encuentran en la región (OPS/OMS).

La institucionalidad regional como factor de incertidumbre

Las crisis subregionales como las de Haití, Colombia o Bolivia son un claro ejemplo de cómo las vulnerabilidades mencionadas afectan indistintamente a los países de la región y generan una alta inseguridad en el entorno vecinal, así como el colapso total de los sistemas políticos e institucionales. A pesar de que

***La OEA deberá
confirmar
su profunda
vocación
hemisférica
representando
los intereses
de cada uno de
sus componentes,
por doloroso
que esto
pueda resultar
para su
secretario general***

la evidencia sobre estas amenazas demuestra que se trata en general de desafíos comunes, la arquitectura hemisférica –que se limita a dar respuestas de escasa efectividad cuando ya un conflicto ha generado demasiadas consecuencias– no ha podido adelantarse a la incidencia de las crisis.

El pasado 2 de mayo de 2005, representantes de los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos se reunieron por segunda vez en menos de un mes para elegir al líder político de la región. Si bien la primera vuelta no pudo dilucidar quién sería el secretario general por el próximo periodo, dejó de manifiesto que a este complejo panorama de realidades locales se suma un nuevo desafío: la búsqueda de la concertación regional.

La primera votación, efectuada el 11 de abril, no solo enfrentó a dos postulantes de gran peso intelectual para dirigir la institución. Detrás de cada uno de los empates se evidenció que la región se encontraba matemáticamente dividida entre el el candidato de la Casa Blanca y uno de inclinación regional (respaldado energicamente por Brasil).

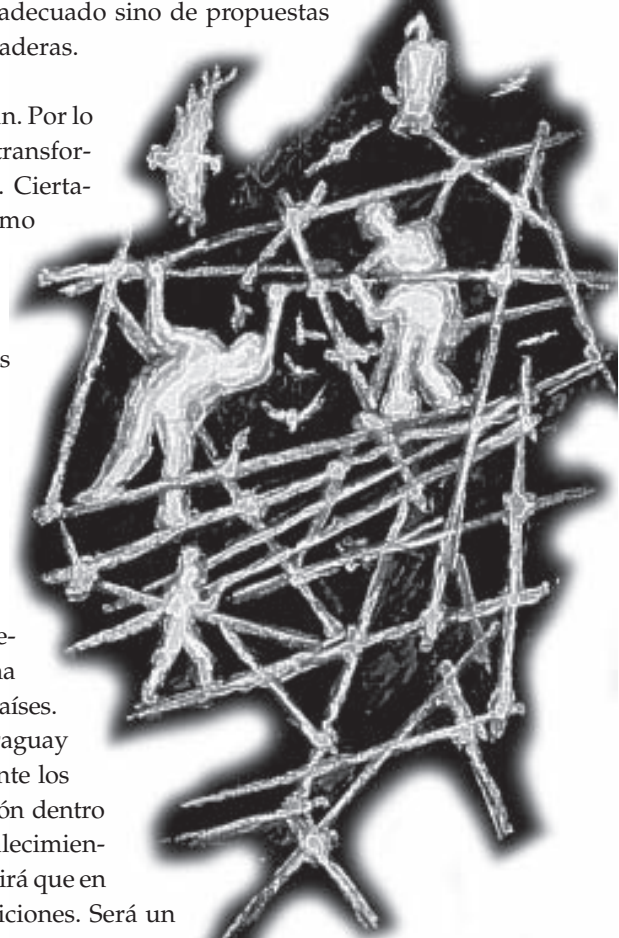
En efecto, el hemisferio se encuentra hoy en la búsqueda de un nuevo equilibrio regional. Por cierto, EEUU continuará estando a la cabeza, pero Brasil ha señalado a través de gestos y acciones que está preparado y dispuesto a jugar un nuevo rol entre sus pares. Durante los últimos años, Itamaraty ha otorgado su apoyo para la resolución de diversas situaciones de crisis institucionales y regionales. Su labor en Bolivia y en la crisis de Haití demuestra este punto.

Paralelamente, el gobierno brasileño ha expresado su intención de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU ante una eventual reformulación del organismo. El apoyo de Brasil a José Miguel Insulza es una clara demostración de cómo este país ha intentado formar un consenso subregional como contrapeso al poder de EEUU. Sin embargo, la tarea no le será fácil porque Argentina y México han manifestado en más de una ocasión el mismo propósito.

En esta nueva etapa, la organización internacional deberá dar cuenta de estas fracturas y trabajar *proactivamente* en la superación de sus diferencias. Desde el punto de vista político, la OEA se ha consolidado como la instancia de concertación regional más importante y el nuevo secretario general deberá realizar esfuerzos adicionales para encontrar los espacios de comunión. La existencia de conflictos fronterizos no resueltos es una muestra de esta necesidad, que requerirá no solo de un análisis adecuado sino de propuestas novedosas para lograr soluciones duraderas.

Varios son los desafíos que se presentan. Por lo pronto la OEA requiere de profundas transformaciones en su organización interna. Ciertamente ella ha enfrentado en el último tiempo un duro trance organizacional. Su último secretario general debió abandonar su puesto en lamentables circunstancias y desde hace años ha perdido gran parte de su prestigio original. Un desafío mayor será recuperar la confianza de los países en el organismo, lo que implica, por cierto, el asumir seriamente el déficit económico que enfrenta la organización.

La reciente crisis en Ecuador y Bolivia recordó que la democracia aún no se ha consolidado en muchos de nuestros países. Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay y Venezuela han experimentado durante los últimos años momentos de gran tensión dentro de sus sistemas políticos, y, sin un fortalecimiento institucional adecuado, nada impedirá que en el futuro se vuelvan a dar estas condiciones. Será un



desafío para la OEA actuar de manera preventiva, favoreciendo el diálogo entre los distintos estamentos sociales y procediendo eficazmente antes de que ocurran nuevos colapsos en nuestras democracias.

Los problemas del futuro requerirán de soluciones vinculantes más que de declaraciones de interés, con énfasis en aquellas situaciones que hagan peligrar la estabilidad democrática y que fomenten las violaciones a los derechos humanos. Existe un amplio consenso con respecto a que la pobreza, las desigualdades, la falta de oportunidades y las precarias condiciones de vida constituyen serios problemas para el futuro institucional y democrático de nuestros países. La OEA deberá convertirse en un lugar privilegiado de convergencia y de comunicación donde, reconociéndose las diferencias específicas de las subregiones, puedan discutirse soluciones pacíficas y viables para resolver estos desafíos.

Además, durante los próximos años, la OEA deberá demostrar que constituye no solo un organismo privilegiado de diálogo y de búsqueda de consenso: deberá confirmar su profunda vocación hemisférica representando los intereses de cada uno de sus componentes, por doloroso que esto pueda resultar para su secretario general. Durante los próximos cinco años José Miguel Insulza tendrá una dura tarea institucional, y su éxito dependerá de la convicción de los países integrantes de que éste debe ser el espacio de concertación política más importante de la región.

Bibliografía

- Batchelor, Meter y Keith Krause: *Small Arms Survey: Counting the Human Cost*, Oxford, 2002.
 Bodemer, Klaus: *El nuevo escenario de (in) seguridad en América Latina*, Recal, Hamburgo, 2001.
 Cepal: *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe*, Santiago, 2002.
 Cepal: *Anexo estadístico social de América Latina 2001-2002*, Santiago, 2003.
 Cepal: *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe*, Santiago, 2004.
 Flasco-Chile: *Gobernabilidad en América Latina: Informe regional 2004*, Flasco, Santiago, 2004.
 PNUD: *Informe de Desarrollo Humano 2002, 2003*.
 Small Arms Survey: *The impact of Small Arms Misuse in Central America*, Occasional paper, octubre de 2002.
 Stefoni, Carolina: «Seguridad humana y migraciones en América Latina» en <www.flasco.cl>, 2002.
 OPS/OMS: *Informe mundial sobre violencia y salud*, 2003.
 Unesco: *Seguridad humana, prevención de conflictos y paz*, Flasco, Santiago, 2002.

Sitios web

- <www.latinobarometro.org>.
 <www.freedomhouse.org>.
 <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barometro_economico/newsid_4067000/4067725.stm>.
 <www.unfpa.org>.